

Ayer terminó la Edad Media en Castellar de la Frontera. Así titulé, a 24 de febrero de 1983, un reportaje en “Diario 16”. Ese día, el primer gobierno socialista de este país había decidido expropiar La Almoraima, junto con el resto del holding de Rumasa, aquella abejita laboriosa cuya vocación de estafa fue un cartero que llamó dos veces a muchos incautos que confiaban ciegamente en la capacidad emprendedora de José María Ruiz Mateos.

La Almoraima seguía siendo entonces el mayor latifundio de Europa, con más de diecisiete mil hectáreas de terreno que tocaban cuatro términos municipales y cuyos antiguos guardas tardaban tres días en recorrer a caballo. Atrás, justo en el inicio de nuestra joven democracia y tan sólo a dos años de un intento de golpe de Estado, quedaban los duques de Medinaceli, los porteros de la finca a quienes se prohibía por escrito usar bigote, las monterías de la aristocracia andaluza o de los militares ingleses de Gibraltar. En aquel momento histórico, toda la propiedad se convertía en una enorme dehesa boyal que pasaba a manos del Estado, a través del Icona.

Entonces, justo entonces, llegaron los profetas del porvenir. Quizá fueran los mismos, con otros nombres y con otros rostros, que nos habían visitado años antes y en nombre de un fracasado proyecto turístico habían invitado al éxodo a los vecinos del castillo para convertirse en chisparreros del exilio en el pueblo nuevo.

Nos decían que La Almoraima iba a servir como experiencia piloto para la reforma agraria de Andalucía. Y si se tiene en cuenta que la verdadera reforma agraria andaluza vino como consecuencia de que los terratenientes parcelaran sus propiedades para obtener mayores ayudas de la Unión Europea, tampoco extraña demasiado que los tecnócratas de hoy quieran fragmentar nuestro patrimonio para venderlo a los especuladores.

Para La Almoraima diseñaron atractivos planes, desde granjas de cocodrilos a campos lúdicos de combate para yuppies, pasando por Eurodisney hasta que París pujó más y nos robó a Mickey Mouse.

En este tiempo extraño en el que desaparece la política y nos gobierna la banca, cuando mueren los derechos sociales y los convenios colectivos, empezamos a volver a la Edad Media y, así, el ministerio de Agricultura, Pesca, Medio Ambiente y otras hierbas, quiere convertir al diez por ciento de esta heredad en un plató de la Escopeta Nacional, carne de montería y de hotel de lujo y aeródromo propio, junto con dos campos de golf y lo que nos echen. De lograr sus sueños, nuestra vocación de pesadilla espera al menos que la berrea de los ciervos estropee a los turistas el swing sobre el hoyo 18.

Todos los grupos municipales, incluido el Partido Popular, han mostrado su rechazo a esta venta. Pero, ¿desde cuándo el gobierno de Mariano Rajoy y de Miguel Arias Cañete hacen caso a nadie, incluyendo a su propio partido? La Junta de Andalucía también se opone a esta privatización de la utopía agropecuaria, que tendría que dar para mucho más que los cien empleos actuales y del encefalograma plano de sus beneficios anuales. Si el Estado no sabe qué hacer con esta tierra, si renuncia a sacarle más provecho y sólo pretende ir vendiéndola, trozo a trozo al mejor postor, ¿por qué durante los últimos treinta años La Moncloa no ha querido que la propiedad sea transferida a la Junta de Andalucía?

Si quieren un hotel, ya tienen uno, sin contar con el del castillo. ¿Por qué no mejoran las calidades de la Casa Convento y de sus veintitrés habitaciones, para hacerlo rentable sin necesidad de construir castillos de cinco estrellas en este aire libre que sólo tuvo un dueño, aquel José Pérez y Pérez, de la familia delos Feos, el sin camisa, el leñador que paseaba semidesnudo por sus vericuetos como si a él le hubiera sorprendido la crisis

antes que a nadie?

¿Qué comprador aguarda a que alguien de el pistoletazo de salida para la nueva colonización de La Almoraima? En tiempos como esto, más vale no hacer preguntas, pero somos muchos quienes creemos que el mejor propietario de estas lindes somos todos, una enorme sociedad limitada con nuestro centímetro correspondiente de alcornoque, quejigo o acebuche, repartido entre cuarenta y cuatro millones de españoles. El Gobierno debe comprender que La Almoraima no es suya, sino de todos, de eso que en otro tiempo llamábamos Estado. De todos nosotros, si y de sus miles de ciervos, muflones o gamos. De sus bueyes lentos y del relincho de las yeguas. No es suya la finca, directora Isabel Ugalde Ruiz de Assin, ni sus apellidos se parecen a los habituales de Castellar, Jimena, San Roque, Tarifa o Los Barrios. No es suya la finca, Ministro Miguel Arias Cañete, usted ya tiene bastante con las propiedades y las empresas que tiene. Nos dicen que quieren vender La Almoraima a razón de seis mil euros el metro cuadrado como consecuencia de nuestros compromisos con la Unión Europea. Ahora va a resultar que la prima de riesgo y la contención del déficit depende de que mil cuatrocientas hectáreas, chispa más o menos, pasen a manos privadas. Seguro que las bolsas esperan expectantes el cierre de la operación.

Intentaremos evitarlo, ténganlo seguro. Probablemente tengan más fuerza sus oscuros intereses que nuestras esperanzas limpias, pero esperemos que nuestras autoridades se mantengan firmes y no acepten Plan Especial de Ordenación de Usos de la Finca La Almoraima, cuya tramitación empezó en noviembre de 2012, para facilitar la reconversión hotelera de ese cielo abierto entre riscos, matorrales y bosques, camiones cargados de corcho, junto a eternos jipis que venden pulseras.

A lo mejor tendríamos que empezar a rendir cuentas de su gestión y preguntar por qué han contratado a una empresa privada, la firma malagueña Ejecución del Planeamiento para la redacción de un plan, como si no hubiera técnicos suficientes que pudieran hacerlo dentro del ministerio. Quizá es que a partir de ahí estén preparando el resto de las privatizaciones.

No queremos sus safaris, sus delirios de grandeza, su Costa del Sol en el corazón del bosque. Queremos que los senderos sigan abiertos a los caminantes y que se busque nuevos ingresos en la agricultura, que fue su principal negocio durante siglos, o en esas energías renovables a las que el Gobierno parece haberle declarado la misma guerra que a los estudiantes, a los jóvenes o a los funcionarios.

Los mismos que quieren privatizar las playas, resucitar el ladrillo y confiar en el turismo extranjero como única y eterna industria de España y de Andalucía, son los que quieren hurtarnos esta selva mediterránea por donde la sombra de la Edad Media está empezando a planear de nuevo.

En nombre de la Plataforma Ciudadana por una "Almoraima Pública" y del Alcalde de Catellar, le queremos expresar nuestro mas sincero agradecimiento al Defensor del Pueblo Andaluz, Don Jesus Maeztu; por el escrito que nos remitió y que fue leído en el Acto celebrado el pasado 10 de Noviembre de 2013.